

Señores

**JUZGADO 33 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ**

E. S. D.

**RADICADO:** 110013103033-202104784-01  
**DEMANDANTES:** EUFEMIA MARULANDA DE CANIZALES  
**DEMANDADOS:** BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.  
**REFERENCIA:** PROCESO VERBAL

**ASUNTO:** ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SEGUNDA INSTANCIA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de **BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.**, tal y como se acredita con el poder y el certificado de existencia y representación legal que obran en el expediente de esta sociedad legalmente constituida e identificada con el NIT 800.240.882-0, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por la doctora Alexandra Elías Salazar, sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, comedidamente procedo a presentar dentro del término legal **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA**, solicitando desde este momento que se **CONFIRME** la sentencia del 22 de febrero de 2022 proferida por LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES, que acertadamente resolvió negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

**RESPECTO AL FONDO DEL ASUNTO**

En el curso del trámite de primera instancia, la parte actora promovió demanda contra BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A., con el fin de que se reconociera la indemnización por el saldo insoluto del crédito de libranza No 9513608684 contratado con el Banco BBVA bajo la póliza VGDB 0110043, pero el 30 de junio del año 2020 la aseguradora respondió a la solicitud de indemnización, indicando que la misma había sido objetada por reticencia

por parte del señor DARIO CANIZALES, aseverando que este no indicó enfermedades preexistentes en su declaración de asegurabilidad, como hipertensión, por lo que esto motivaba la objeción del pago del respectivo seguro.

Ahora bien en la continuación del sustento se procederá a detallar uno a uno los argumentos por los cuales LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES tomó la decisión jurídicamente correcta.

**1. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEBE SER CONFIRMADA, POR CUANTO EN EL CURSO DEL PROCESO SE PROBÓ LA PRESCRIPCIÓN Y/O CADUCIDAD EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 NUMERAL 3 DE LA LEY 1480 DE 2011**

Lo primero que deberá tener en cuenta el Despacho a efectos de confirmar la decisión tomada por el Juzgador en primera instancia, es que la La Ley 1480 de 2011, específicamente en su artículo 58, fijó el procedimiento que debe seguir ésta Superintendencia, cuando en cumplimiento de sus facultades jurisdiccionales, deba tramitar y resolver una Acción de Protección al Consumidor Financiero. En el numeral tercero del nombrado artículo 58, el legislador consagró que los consumidores financieros tendrán un año contado a partir de la terminación de la relación contractual, para interponer la referida acción so pena que opere el fenómeno de la caducidad y/o prescripción. El tenor literal de la norma nombrada señala lo siguiente:

***“ARTÍCULO 58. PROCEDIMIENTO.** Los procesos que versen sobre violación a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales en todos los sectores de la econom.a, a excepción de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares, se tramitar.n por el procedimiento verbal sumario, con observancia de las siguientes reglas especiales:*

*(...)*

*Las demandas para efectividad de garantía, deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía y las controversias netamente contractuales, a más tardar dentro del año siguiente a la terminación del contrato. En los demás casos, deberán*

*presentarse a más tardar dentro del año siguiente a que el consumidor tenga conocimiento de los hechos que motivaron la reclamación. En cualquier caso deberá aportarse prueba de que la reclamación fue efectuada durante la vigencia de la garantía.” (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

En este sentido, el Estatuto del Consumidor previó que la acción de protección al consumidor tratándose de controversias meramente contractual prescribe en el término de un año contado a partir de la terminación del contrato, y que, en el caso bajo estudio se enmarca en este supuesto, resulta necesario precisar que el cómputo del plazo indicado debe contabilizarse desde la realización del riesgo asegurado. El cual ocurrió en la fecha del fallecimiento del asegurado, tal y como se desprende de los siguientes apartes:

*(...) **en el seguro de vida de deudores se cubre el riesgo consistente en la muerte del deudor**, así como su eventual incapacidad total o permanente. Así, ha dicho la Corte que ‘el riesgo que asume el asegurador es la **pérdida de la vida del deudor**, evento que afecta tanto al asegurado mismo, como es obvio, como eventualmente a la entidad tomadora de la póliza, en el entendido de que su acreencia puede volverse de difícil cobro por la muerte de su deudor, pero el específico riesgo asumido por la compañía de seguros en la póliza objeto de litigio, no es la imposibilidad de pago del deudor por causa de su muerte, porque si así fuera podría inferirse que la póliza pactada con un riesgo de tal configuración tendría una connotación patrimonial y se asemejaría a una póliza de seguro de crédito. Lo que se aseguró es lisa y llanamente el suceso incierto de la muerte del deudor, independientemente de si el patrimonio que deja permite que la acreencia le sea pagada a la entidad bancaria prestamista’ (Sent. Cas. Civ. de 29 de agosto de 2000, Exp. No. 6379)<sup>1</sup>. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

**“Por manera que la realización del riesgo o el acaecimiento del siniestro tiene dos efectos, como ya se indicó. Por un lado, la cesación del contrato de seguro y, por otro, el nacimiento de la obligación de pago**

---

<sup>1</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC6709-2015. Mayo 28 de 2015

**por la aseguradora. Momento desde el que se debe contabilizar el termino para que el interesado proponga la demanda, en este caso, dentro de la acción de protección al consumidor ante la Superintendencia Financiera, por lo que no le asiste la razón al apelante en su reproche sobre este particular**<sup>2</sup>. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En consonancia con lo anterior, cabe señalar que la Honorable Superintendencia Financiera de Colombia en sentencia proferida el 22 de febrero de 2022, refirió con claridad que el cómputo del término de prescripción de las acciones de protección al consumidor en los eventos en que el riesgo asegurado sea la muerte, deberá realizarse desde la fecha del deceso del asegurado. Así mismo, indicó que, acreditados los presupuestos para declarar la prescripción de la acción, resulta improcedente analizar de fondo las pretensiones propuestas.

En el caso concreto, el contrato de seguro en donde el señor Darío Canizales Alonso (Q.E.P.D) se encontraba vinculado terminó el día 4 de junio de 2020, fecha en que el Asegurado (Q.E.P.D) lamentablemente falleció. El demandante solicitó “la ejecución del seguro de vida para la cancelación del crédito por libranza que en vida pagaba mi difuntoesposo, DARIO CANIZALES ALONSO (q.e.d.p)...”, término que interrumpe la prescripción; por lo tanto, solo hasta el 12 de junio de 2020, en el caso de autos el derecho que tenía la Accionante de incoar una Acción de Protección al Consumidor Financiero ante esta Superintendencia prescribió desde el día 12 de junio de 2021, y radicó la demanda hasta el 9 de noviembre de 2021, pues para esa fecha ya había pasado más de un año desde la terminación del aseguramiento.

En conclusión, se puede evidenciar que la parte activa solo radicó la demanda hasta el 9 de noviembre de 2021, por lo tanto al revisar el expediente se evidencia que esta acción había prescrito desde el 12 de junio de 2021, fecha en la cual se cumplió el año que tenía el actor para iniciar las acciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria.

---

<sup>2</sup> Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogotá. Radicado 110010800008 201801546 01. Julio 22 de 2021

## 2. EL REPARO PRESENTADO POR LA PARTE DEMANDANTE ES TOTALMENTE INFUNDADO Y CARENTE DE SUSTENTO JURÍDICO

El recurrente presentó reclamación formal a mi mandante el 12 de junio de 2020, como se puede evidenciar en el plenario; pero el actor manifiesta al a quo que la prescripción se vió interrumpida por la acción de tutela presentada, o la demanda primigenia que fue rechazada en los despachos de la ciudad de Pereira, fundamento antitécnico en razón a que la interrupción de la prescripción solo opera conforme a lo establecido en el art. 94 del CGP en su inciso final.

*“ARTÍCULO 94. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD Y CONSTITUCIÓN EN MORA.*

*(...) **El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez**”.*

Por lo tanto es claro, que esta interrupción de la prescripción se dio a partir del requerimiento hecho por el deudor al acreedor, es decir el 12 de junio de 2020, y esta solo opera por una sola vez; y no como lo quiere hacer ver el recurrente que debió interrumpirse por las otras acciones adelantadas como acción de tutela o demanda que fue rechazada por falta de diligencia procesal.

Como se puede observar, el legislador no reguló en detalle la citada figura; razón por la cual, la Sala Civil (CSJ)<sup>3</sup> ha señalado algunas características o “rasgos” que se deben considerar al momento de utilizarla, a saber:

(i) El requerimiento extrajudicial debe involucrar un derecho autoatribuido, es decir, una expresión de voluntad de quien se asume como titular de un derecho sustancial, orientada directa y reflexivamente a que otra persona se comporte de manera consistente con ese derecho.

---

<sup>3</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC712-2022, Radicación n.º 11001-31-03-015-2012-00235-01, veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022). M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

Así, por ejemplo, “el acreedor cambiario puede dirigir un escrito a su deudor, instándolo a que sufrague el crédito incorporado en un cartular; o la víctima de un accidente de tránsito al agente dañador, reclamándole la indemnización de los daños atribuibles a su conducta lesiva”.

Siguiendo a la Corte, la interrupción operará entonces frente a las acciones relacionadas con esa autoatribución, como lo serían en las hipótesis antes propuestas, la acción cambiaria y la ordinaria de responsabilidad civil, en su orden.

(ii) Esta clase de interrupción civil opera en el momento en el que el deudor conoció, o razonablemente debió conocer, del requerimiento efectuado por su acreedor.

(iii) El requerimiento escrito puede incorporarse en un mensaje de datos, y remitirse al destinatario a través de cualquier medio electrónico idóneo (Art. 6, Ley 527/99). En este escenario, igualmente deberá acreditarse que el destinatario conoció, o tuvo la posibilidad de conocer, el contenido del requerimiento privado remitido por medios electrónicos

(iv) Siguiendo las reglas generales, la comunicación del requerimiento privado al sujeto pasivo de la relación sustancial impondrá que el término de prescripción no consumado reinicie su cómputo, efecto interruptivo que solo puede verificarse **«por una vez»**.

Ahora bien, visto que el citado término prescriptivo puede ser interrumpido por las causales consignadas en los artículo 2539 del Código Civil y el inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, siendo éstas el reconocimiento de la obligación por el deudor, expresa o tácitamente (interrupción natural), la demanda judicial (interrupción civil), o el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, **la cual solo tendría lugar por una sola vez;** por lo que es claro y evidente que no se encuentra acción diferente a la adelantada por el aceedor el 12 de junio de 2020 como reclamación a mi mandante y que opere como interrupción de la prescripción como lo ha querido parecer con la acción de tutela (mecanismo subsidiario) o demanda radicada y posteriormente rechazada.

En el caso en concreto, es que aún contando la interrupción de la prescripción de que trata el inciso final del artículo 94 del Código General del Proceso, la cual podría entenderse que se materializó por medio de la solicitud de indemnización que presentó la actora el día 12

de junio de 2020, la Acción de Protección al Consumidor Financiero de todas maneras se encuentra prescrita, debido a que se presentó la demanda con posterioridad al año siguiente en que se radicó la primera solicitud para hacer efectivo el aseguramiento.

Por lo anterior y lo expresado en este acápite y lo que se encuentra en el expediente se puede confirmar que el recurrente el 12 de junio presentó ante la aseguradora reclamación, por lo tanto solo por esta vez operó la interrupción de la prescripción, por lo que conforme a la legislación vigente solo se tendría hasta el 12 de junio de 2021 para presentar la demanda correspondiente, situación que solo llegó a surtirse el 9 de noviembre de 2021, fecha que para la época ya estaba prescrita la acción.

### **3. SOLICITUD DECLARATORIA DE DESIERTO DEL RECURSO DE APELACIÓN**

En este punto solicito respetuosamente se declare desierto el recurso de apelación presentado por la parte actora, por cuanto el mismo fue admitido por el despacho mediante Auto del 29 de noviembre de 2022 y notificado en estados el 30 de noviembre de la misma anualidad. Providencia en la que se concedió el término de cinco días contados a partir de la ejecutoria de dicho auto para sustentar los reparos de segunda instancia. Situación que no ocurrió, por cuanto no obra en el expediente, o al menos no ha sido conocido por mi representada la copia de dicho escrito de sustentación ante el Juzgado 33 Civil del Circuito de Bogotá. Llámese la atención a este respecto que, el artículo 14 de la Ley 2213 de 2022 dispuso que una vez ejecutoriado el auto que admite el recurso de apelación por parte del Juez de Segunda Instancia, las partes deberán sustentar el recurso dentro de los cinco días siguientes, so pena de declararlo desierto.

**ARTÍCULO 14. APELACIÓN DE SENTENCIAS EN MATERIA CIVIL Y FAMILIA.** *El recurso de apelación contra sentencia en los procesos civiles y de familia, se tramitará así:*

*(...) Ejecutoriado el auto que admite el recurso o el que niega la solicitud de pruebas, el apelante deberá sustentar el recurso a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. De la sustentación se correrá traslado a la parte contraria por el término de cinco (5) días. Vencido el término de*

*traslado se proferirá sentencia escrita que se notificará por estado. **Si no se sustenta oportunamente el recurso, se declarará desierto.***

De la lectura de la normatividad transcrita, se concluye que el trámite del Recurso de Apelación establecido en la Ley 2213 de 2022 establece claramente que ejecutoriado el auto que admite el recurso, el apelante tiene cinco (05) días para sustentarlo. Por tanto, se entiende que la apelación se surte en dos momentos distintos, el primero, en la interposición que se hace ante al *A quo*, en la cual se esbozan los reparos concretos en contra de la sentencia a fin de que el juzgador de primera instancia conceda el recurso presentado. El segundo, cuando una vez admitida la apelación por parte del juzgado de segunda instancia, se sustenta la misma ante ese juzgador de alzada, quien finalmente es quien decidirá sobre el fondo del recurso. Por tal motivo, el legislador introdujo al final del inciso 3 del citado artículo 14 de la Ley 2213 de 2022, la consecuencia de la ausencia de sustentación oportuna, esto es, que el recurso se declare desierto. De modo que no hay lugar a otras interpretaciones.

Ahora bien, sin perjuicio de la claridad de la disposición aludida, se precisa que el deber de sustentar el recurso de alzada ante el juez de segunda instancia comporta una carga procesal contenida en una disposición de orden público y de obligatorio cumplimiento, por lo que el argumento según el cual el H. Tribunal incurrió en un exceso formalismo, reviste un reparo sin fundamento.

En este sentido, se debe recordar el contenido del artículo 13 del Código General del Proceso, según el cual, las normas procesales son de orden público, lo cual conlleva la imposibilidad de modificación por parte de los funcionarios y los particulares, salvo autorización expresa de la ley. Supuesto que no tiene lugar en este caso. De manera que las disposiciones atinentes al trámite del recurso de apelación corresponden a normas de obligatorio cumplimiento. Las cuales, no podrán ser modificadas por los funcionarios ni las partes.

**ARTÍCULO 13. OBSERVANCIA DE NORMAS PROCESALES.** *Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y **en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo***



**autorización expresa de la ley (...)** (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Con miramiento a esta premisa, no queda camino distinto que no revocar la sentencia proferida el 22 de febrero de 2022, puesto que se advierte que la recurrente no satisfizo exigencias relacionadas con el deber de sustentación del recurso de alzada referidas en el artículo 14 de la Ley 2213 de 2022, las que se tornaban necesarias para que la Corporación profiriera sentencia de segunda instancia.

En consonancia con lo indicado, se advierte que las normas que regulan el trámite del recurso de apelación contra la decisión de instancia no son susceptibles de modificación por las partes y/o los funcionarios en tanto son normas de orden público, por lo que, habrá de estarse al tenor literal de las disposiciones regulatorias. En este sentido, se colige que la parte apelante debía sustentar los reparos concretos formulados ante la primera instancia durante el término de cinco días contados a partir del día siguiente a la notificación del auto mediante el cual se admitió el recurso por parte del Juez de Segunda Instancia, so pena de ser declarado desierto.

Ahora bien, un aspecto de particular importancia que no puede pasarse por alto es el carácter perentorio e improrrogable de los términos, esto es, el carácter definitivo de los plazos conferidos para el cumplimiento de las cargas procesales. Por lo que, una vez fenecido el plazo establecido, de manera indefectible deberán desatarse los efectos previstos respecto de su cumplimiento o incumplimiento, de conformidad con el artículo 117 del Código General del Proceso. Disposición que ha sido objeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos:

*“los términos señalados en este código para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario, de ahí que según lo indicado por la jurisprudencia “los términos procesales son de orden público y por ende de imperativa observancia para el juez y las partes, por lo cual el cómputo de tales no puede quedar al arbitrio de los litigantes para que, con sus actuaciones, alcancen la preponderancia y virtualidad*

*de alterarlos y así alargarlos para poder ejecutar determinadas cargas procesales con que cuentan (...), lo cual es tópico del todo inaceptable”<sup>4</sup>.*

Acotado lo anterior, resulta claro que los términos procesales son de orden público y por ende de obligatorio cumplimiento para las partes y funcionarios. Lo cual implica que las cargas procesales deberán ser atendidas en los plazos conferidos para el efecto. En este sentido, el término de sustentación del recurso de alzada contenido en el artículo 14 de la Ley 2213 de 2022 debía ser objeto de cumplimiento por la recurrente. Por lo que la conducta adoptada por las partes desata los efectos previstos en la referida disposición. En consecuencia, dado que el apoderado de la parte Demandante no sustentó el recurso de apelación ante este despacho en el término de cinco días contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la admisión del recurso, el efecto derivado es declarar desierto el recurso en mención.

- ***Posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.***

Con relación a la oportunidad para interponer y sustentar el recurso de apelación, la Sala de Casación Civil de La Corte Suprema de Justicia, en Sentencia STC8909 de 2017, indicó

*“Significa lo anterior que una es la ocasión para interponer el recurso que indudablemente es «inmediatamente después de pronunciada», lo cual da lugar a que se verifique el requisito tempestivo, y otro es el momento del desarrollo argumentativo del reproche, que tratándose de sentencias presenta una estructura compleja, **según la cual la sustentación debe presentarse frente al a quo y luego ser desarrollada «ante el superior»**, conforme lo contemplan los incisos 2º y 3º del numeral 3 del citado canon 322 (...)”<sup>5</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Es decir, que tal como se ha abordado en este escrito, se trata de dos oportunidades procesales diferentes. En la primera se deberán presentar los reparos ante el juez de primera instancia, de lo cual dependerá la concesión del recurso. Mientras que en la segunda, se deberán sustentar los reparos ante el Juez de segunda instancia, de lo cual

<sup>4</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. STC 5922-2018. Mayo 8 de 2018.

<sup>5</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación civil. Sentencia STC8909 de 2017. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

dependerá la resolución del recurso, o en su defecto, la declaratoria de desierto del mismo. En el mismo sentido, refiriéndose a la consecuencia jurídica de declaración de desierto del recurso que no se sustente ante el superior, la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC10405 de 2017, precisó:

*“Al respecto esta Sala ha sostenido que “el legislador previó como sanción la declaratoria de desierto del recurso de apelación interpuesto contra una sentencia cuando: (i) no se precisan, de manera breve, los reparos concretos que se le hacen a la decisión, al momento de presentar la impugnación en la audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia y **(ii) cuando no se presente la sustentación de los mencionados reparos ante el superior**” CSJ STC11058-2016, 11 ago. 2016, rad. 02143-00, entre otras). Subraya la Sala. (...)”<sup>6</sup>(Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

En la misma sentencia y sobre el hecho de desconocer el trámite que se debe surtir ante el *ad quem*, la Sala precisó:

*“Aceptar entonces que los reparos concretos aducidos ante el a quo al formularse la alzada contra una sentencia son suficientes y que puede soslayarse la sustentación oral ante el superior, impuesta en el canon 322 del Código General del Proceso, contradice los postulados en mención y, de contera, el principio democrático representativo, según el cual es el Congreso de la República, revestido de una amplia potestad legislativa, el competente para regular los procedimientos judiciales (art. 150, C.P.).”<sup>7</sup>*

En el mismo sentido, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC87360 de 2019, fijó su postura y diferenció entre invocar de manera breve los reparos

---

<sup>6</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación civil y Agraria. Sentencia STC10405 de 2017. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

<sup>7</sup> Ibidem.

y la sustentación concreta de los mismos que debe hacerse ante el superior, en los siguientes términos:

*“Para finalizar, es de anotar que la decisión de declarar desierto el recurso de apelación se aviene a lo expuesto por nuestro Superior funcional, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en diferentes sentencias de tutela, entre ellas, la STC13606 del pasado 18 de octubre de 2018, en las cuales ha concluido que “... la sustentación de la alzada ha de realizarse, de necesidad, oralmente y ante el juez individual o plural ad quem que debe proferir la sentencia correspondiente so pena de “nulidad”; claro, para que el juzgador o los magistrados que deban emitir el fallo de segundo grado puedan “escuchar” la “sustentación”, esta ha de realizarse al interior de la audiencia que para lo propio estableció el canon 327 ejusdem, misma que se adelanta en sede de segunda instancia desarrollándose su decurso con una etapa inicial en que se “oirán las alegaciones de las partes”. Es decir, se dará lugar a la escucha, in situ, de la “sustentación” que allí es menester emprender y luego, como subsecuente estadio procedimental, “se dictará sentencia”. **Queda evidenciado que, en manera alguna, aquella fase sustentatoria ni se puede pretermitir como tampoco ensayar justificar su existencia porque ante el examinador a quo contingentemente se hubiera hecho una exposición harto prolija de los “reparos concretos” que ante él son los que han de realizarse ...**”<sup>8</sup>(Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

De tal suerte que, tal como lo ha indicado la Honorable Corte Suprema de Justicia, en ningún caso es posible pasar por alto la sustentación ante el superior que admite la apelación. Puesto que es él, ante quien debe sustentarse la inconformidad de fondo sobre la sentencia recurrida. No podría pensar el apelante que los reparos hechos ante el juzgador de primera instancia son suficientes para que el examinador de segunda instancia tome una decisión. Dicho de otra manera, aterrizando la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al caso concreto, resulta evidente que debe declararse

---

<sup>8</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil y Agraria. Sentencia STC8736 de 2019. M.P Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

desierto el recurso de apelación, en la medida que la parte recurrente se limitó a formular los reparos, sin haberlos sustentado ante el juzgador de segunda instancia.

### **PETICIONES**

**PRIMERA.** Conforme a lo expresado en líneas precedentes le solicito al despacho de forma muy respetuosa **DECLARAR DESCIERTO** el recurso de apelación, en razón a la falta de sustento en la oportunidad procesal debida, según nuestra legislación vigente.

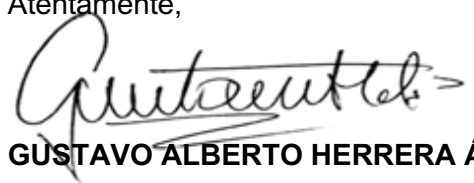
**SEGUNDA.** De forma subsidiaria En mérito de lo expuesto y probado en el proceso, solicito respetuosamente a su despacho se sirva **CONFIRMAR** la decisión tomada en la sentencia proferida por LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES el 22 de febrero de 2022, en la que se negaron todas las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener reconocimiento indemnizatorio del saldo insoluto de la obligación del crédito de libranza No 158-9613608684, por parte de la aseguradora BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. liberando de toda responsabilidad a esta última. Especialmente por cuanto en este caso se demostró la PRESCRIPCIÓN Y/O CADUCIDAD: EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 58 NUMERAL 3 DE LA LEY 1480 DE 2011.

**TERCERA.** Por lo ya expresado, solicito a este despacho **CONDENAR EN COSTAS** al apelante en la presente instancia.

### **NOTIFICACIONES**

Al suscrito en la Calle 69 No.04-48 Of. 502 Ed. Buró 69 de la ciudad de Bogotá o correo electrónico: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Atentamente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**

C.C. No 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.